



ESTRATEGIA NACIONAL DE PENSIONES

Octubre 2008



ESTRATEGIA NACIONAL PARA PENSIONES.

1.- Progreso en relación con el informe 2005-2008 y desafíos identificados en el Informe conjunto 2007.

El informe nacional presentado por España en el año 2005 ponía de manifiesto, por un lado, el buen comportamiento que había experimentado la economía y el mercado de trabajo, y, por otro, cómo esa situación había permitido conseguir sucesivos superávits en el Sistema de la Seguridad Social e incrementar las dotaciones al Fondo de Reserva, constituido como un elemento de garantía de equilibrio futuro para los posibles desajustes financieros que pudieran producirse. Dicho Fondo constituía uno más de los distintos elementos (entre ellos los procesos de reforma) que permitían asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.

Se indicaba en el Informe que dicha situación se enmarcaba también en un entorno general de envejecimiento de la población, que aconsejaba mantener un proceso dinámico de control periódico de la evolución de las pensiones a través de la concertación social y de los procesos de reformas. Se anunciaba también que siguiendo las pautas del proceso del Pacto de Toledo, se estaban llevando a cabo nuevas negociaciones con los interlocutores sociales para establecer las medidas normativas específicas que permitieran materializar, en actuaciones concretas, las Recomendaciones que en el ámbito de la protección social se habían propuesto por la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Dichas medidas se recogen en ***la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social.***

El contenido de esta reciente reforma, ha de enmarcarse también en el ámbito de las propuestas y recomendaciones que para España se habían identificado tanto en el Informe sobre pensiones adecuadas y sostenibles de 2006, como en el Informe Conjunto de Protección Social e Inclusión Social de 2007 en los que se indicaba que la mayor presión financiera en España vendría determinada por la tendencia demográfica con un envejecimiento más tardío pero también más intenso que en el resto de Europa, si bien en el Informe de Sostenibilidad de las Finanzas Públicas de 2006 se hacía constar que por su estructura demográfica y evolución económica, España era uno de los países considerado de riesgo medio.

En estos informes europeos se apuntaba que los retos de futuro se identificaban fundamentalmente con la necesidad de incrementar las tasas de empleo de las mujeres y las de las personas mayores, junto con la necesidad de fomentar los mecanismos adicionales dirigidos a estimular la jubilación gradual y flexible. Dentro de esa línea hay que mencionar también que en el Informe de Progreso Anual de 2007 sobre los Planes Nacionales de Reforma se consideraba que España necesitaba mayores esfuerzos para modernizar el mercado de trabajo, articular la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo e implementar reformas de pensiones que permitieran mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.



El contenido de la nueva reforma se enmarca por tanto en el contexto de las exigencias derivadas de la situación sociodemográfica y del proceso de envejecimiento, de la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo y del fenómeno de la inmigración, todo ello relacionado con los criterios armonizadores en el ámbito de la Unión Europea (UE) con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

Aspectos generales del contenido de la reforma.

Sin perjuicio del desarrollo más detallado que en cada apartado de este documento se efectúa para cada una de las medidas contenidas en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, se indican aquellas que se relacionan con las propuestas que para España se habían efectuado en los documentos comunitarios mencionados:

- Se han adoptado medidas de **mayor fomento de la flexibilidad en la edad de jubilación**, que han ido dirigidas tanto a racionalizar la figura de la compatibilidad entre un trabajo a tiempo parcial y una pensión parcial, como a seguir fomentando la permanencia en activo más allá de los 65 años.
- Se establecen nuevos requisitos de tiempo de cotización, antigüedad en la empresa, mantenimiento de la jornada y cumplimiento de una edad mínima **en el acceso a la jubilación parcial**, limitando al tiempo la posibilidad de anticipar la edad de jubilación mediante la concurrencia de los mecanismos de reducción de la edad por realización de trabajos penosos, peligrosos o insalubres y los correspondientes a la jubilación parcial, en el objetivo de limitar las situaciones de menor correspondencia entre aportaciones y prestaciones.
- Se han introducido criterios de **contributividad en el cálculo de la pensión de incapacidad permanente, en los supuestos en que derive de enfermedad común**, cuya cuantía vendrá ahora graduada en función del número de años cotizados, situación que hasta ahora era irrelevante para determinar dicha cuantía. También en relación con la intensificación de la correlación entre cotizaciones y prestaciones, se establece un nuevo cómputo para el período mínimo de cotización exigido para acceder al derecho a la pensión de jubilación.
- En relación con la jubilación anticipada y la posibilidad de aplicar a nuevos colectivos los beneficios de **reducción de la edad de jubilación por trabajos penosos**, se establecen las condiciones bajo las cuales se reconocerá esa posibilidad en orden a preservar el equilibrio económico-financiero, estableciendo un incremento en la cotización de los trabajadores beneficiados por la reducción de edad.
- En el entorno de la **modernización del sistema de pensiones**, se amplían los criterios de reconocimiento de la pensión de viudedad bajo determinados requisitos a los supuestos de parejas de hecho, se limita el acceso a la pensión cuando existe separación o divorcio en el momento del fallecimiento y se



establece una pensión temporal de viudedad, a fin de garantizar que el beneficiario mantenía una relación familiar o de dependencia económica con el fallecido.

- La Ley 40/2007 establece que cada año se efectuará un informe sobre evaluación y estrategias del sistema de pensiones que será remitido a las Cortes Generales para cumplir el **objetivo de efectuar un seguimiento y evaluación del Sistema** tal como se indicó en las Recomendaciones de la renovación del Pacto de Toledo en el año 2003, y que se recoge también en el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social firmado en el año 2006 entre el Gobierno y los interlocutores sociales.
- Por otro lado y a efectos de afianzar la solidez financiera de las pensiones en España, **se iniciarán nuevamente antes de finalizar el presente año reuniones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo** con objeto de establecer y renovar dentro de la dinámica iniciada en el año 1995, cauces de nueva reforma a través del establecimiento de Recomendaciones que a nivel político permitan concretar medidas adicionales a tener en cuenta para afianzar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones,

Políticas de garantía de ingresos mínimo.

En el Informe nacional de 2005, se ponía de manifiesto que, en relación con las pensiones mínimas, se estaba llevando a cabo, con el **objetivo de alcanzar un incremento del 26% en la cuantía de dichas pensiones para el periodo 2004-2008**, objetivo que se ha visto superado, ya que en este periodo los importes de las principales clases de pensión con cuantías mínimas han llegado a experimentar hasta un 35,9 por ciento de incremento en las cuantías correspondientes a beneficiarios con cónyuge a cargo.

Adicionalmente, se han introducido nuevas políticas sobre pensiones mínimas para determinados colectivos de pensionistas, y en cuanto a las pensiones no contributivas han experimentado una mejora de su poder adquisitivo al haberse aplicado incrementos adicionales al del IPC en el periodo 2004-2008.

Hay que indicar que, en relación con las políticas descritas de pensiones mínimas, su financiación se efectúa a través de los Presupuestos Generales del Estado, que financian actualmente una parte de los complementos para alcanzar los importes de las pensiones mínimas, en una secuencia progresiva que concluirá en 2013, fecha en la que la financiación debe ser ya del 100 por cien.

Reformas relacionadas con el mercado de trabajo y la cotización.

Durante los últimos cuatro años se **han incrementado las cuantías de las bases mínimas de cotización** de los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social, manteniendo una evolución en paralelo entre las cotizaciones y las prestaciones, y



desarrollando, al tiempo, actuaciones específicas respecto de determinados colectivos (incremento de las bases de cotización para los trabajadores autónomos; elevación diferencial de las bases de cotización para los trabajadores por cuenta propia con menor número de años cotizados; aumento de las bases mínimas de cotización en función del crecimiento del salario mínimo; aumentos de la cotización en el Régimen Especial del Mar; etc.)

Las actuaciones concretas en el ámbito del mercado laboral, se corresponden con la firma, en 2006, entre el Gobierno y los interlocutores sociales de un **Acuerdo**, que tuvo como resultado la publicación de la **ley 43/2006, de 2 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo**, cuya finalidad es hacer frente al cumplimiento de los objetivos de Lisboa, incrementar la tasa de ocupación de las mujeres y de las personas con discapacidad y evitar las altas tasas de temporalidad observadas en nuestro mercado laboral. Para alcanzar estos objetivos las medidas incorporadas a la Ley van dirigidas a impulsar y apoyar el empleo, la contratación indefinida y la conversión de los contratos temporales en indefinidos, así como la utilización de contratos indefinidos iniciales a través de bonificaciones en las cuotas empresariales para las empresas que realizan dichos tipos de contrato.

La Ley incorpora también medidas para limitar la utilización sucesiva de contratos temporales y para potenciar la eficiencia de las políticas activas de empleo y mejorar la protección de los trabajadores ante la falta de empleo.

En relación con las medidas del mercado laboral, el Real Decreto 870/2007 regula el programa de **apoyo al empleo de las personas con discapacidad** que tienen mayor dificultad de inserción laboral. Una de las medidas utilizadas es el empleo con apoyo, que consiste en un conjunto de actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan en el propio puesto de trabajo a los trabajadores discapacitados, unos preparadores laborales especializados. Estas medidas de apoyo se relacionan también con el Programa Nacional de Reformas de España de 2005 dentro del sexto eje de actuación del mercado de Trabajo y Diálogo Social y las medidas que favorecen la integración laboral de las personas con discapacidad.

Asimismo, la implantación del Sistema de Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia (a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre) origina un incremento de empleo a través del desarrollo de los servicios correspondientes a esta actividad, así como a la incorporación al sistema de la Seguridad Social de los familiares de las personas dependientes que estén constituidos como cuidadores informales de los mismos.

Aspectos relacionados con la igualdad de género.

En el año 2007, y dentro de la política de supresión de los obstáculos que dificultan la igualdad entre hombre y mujeres, ha entrado en vigor **la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres**, dirigida a eliminar



cualquier tipo de discriminación a través de objetivos dirigidos tanto a medidas laborales y de Seguridad Social, como a garantizar la igualdad en el acceso al empleo público, de igualdad en materias de protección social y a otros aspectos relacionados con el principio de igualdad.

En el correspondiente apartado de este Informe se indicará de forma más detallada las medias específicas relacionadas con aspectos de la protección social y del empleo, que en conjunto van dirigidas a intensificar los aspectos relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y a facilitar que se pueda compartir entre el padre y la madre los permisos correspondientes por el nacimiento o adopción de hijo, o acogimiento de menores y los cuidados que se le puede prestar durante los primeros años de vida o durante los primeros momentos de inserción en el nuevo hogar familiar.

Situación de la afiliación de trabajadores extranjeros en el Sistema de Seguridad Social.

En el Informe de Estrategia Nacional del año 2005, se avanzaban los primeros resultados del **proceso de regularización de inmigrantes** que se estaba llevando a cabo en aplicación de las medidas contenidas en el Real Decreto 2393/2004. El efecto final de dicho proceso de regularización supuso un incremento de 600.000 afiliados a la Seguridad Social, incremento que hay que situar en un contexto general de aumento sostenido en los últimos años del número de afiliados extranjeros. **Con cifras de 2008 el total de afiliados extranjeros asciende a 2.130.000**, lo que supone un 11,1 por ciento del total afiliados. El 65 por ciento de los extranjeros son trabajadores procedentes de países que no forman parte de la Unión Europea. Una de las características de dicho colectivo es que se trata de una población joven que supone a corto y medio plazo una situación beneficiosa para el Sistema de Seguridad Social al suponer un aumento del colectivo de trabajadores que efectúan sus correspondientes cotizaciones al sistema y por tanto ayudar al equilibrio económico financiero.



ESTRATEGIA NACIONAL PARA PENSIONES.

2.- Revisión de la adecuación.

La evolución de los últimos años en el Sistema de pensiones español, en lo que a adecuación se refiere ha continuado la senda iniciada hace unos años, con la mejora de algunos aspectos relacionados con la garantía de ingresos mínimos, con el reconocimiento como períodos cotizados de los períodos de reducción de jornada o de la excedencia por cuidado de hijos, la mejora relativa de la situación de las mujeres en los niveles de pensión. Estas mejoras se corresponden en parte con las normas que se han introducido a partir de enero de 2008 por la ley 40/2007 y existe una previsión de que el aspecto de la adecuación se refuerce en el futuro con nuevas medidas que comenzarán a plantearse, en el marco de una nueva renovación del Pacto de Toledo cuyas primeras reuniones está previsto que se produzcan en el segundo semestre del presente año.

En relación con las políticas específicas dirigidas a mejorar la situación de los pensionistas con menores ingresos, los esfuerzos se han dirigido fundamentalmente al ***incremento adicional anual de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas***, en relación con la revalorización general que se efectúa en función de la variación del Índice de Precios al Consumo .

En la política de pensiones mínimas el objetivo previsto para el período 2004-2008 era conseguir un incremento del 26 por ciento en sus cuantías. La política real llevada a cabo en estos años ha permitido superar dichos porcentajes en todas las pensiones mínimas, pero con distinta intensidad en función de las cargas familiares. (Las cuantías de pensiones mínimas en el sistema español de pensiones se aplican en función de las distintas clases de pensión, edad del pensionista y su situación familiar según tengan o no cónyuge a cargo).

Para ***todas las pensiones de jubilación e invalidez que tienen cónyuge a cargo***, el incremento de la pensión mínima ha sido del 36 por ciento en el período 2004-2008, y para las pensiones que no tienen cónyuge a cargo el aumento ha sido del 28 por ciento.

En las pensiones de viudedad, las cuantías mínimas dependen de distintas situaciones en las que se puede encontrar el titular de la pensión, y que se relacionan con la edad, la discapacidad del titular y la existencia ó no de cargas familiares. Para esta clase de pensión el incremento que han experimentado las cuantías, según cada situación particular, oscilan entre un 28 por ciento para pensionistas menores de 60 años sin cargas familiares y un 60 por ciento para titulares con cargas familiares.

En el siguiente cuadro se presenta el número de pensionistas que se encuentran en cada clase de pensión y el incremento que han experimentado desde 2004.



Datos a junio de 2008

Clase de pensión	Número de pensiones mínimas	% incremento de la pensión 2004-2008
Jubilación e Invalidez		
- Con cónyuge a cargo	310.897	36
- Sin cónyuge a cargo	1.044.130	28
Viudedad		
- Mayor 65 años o discapacitado	623.941	28
- Edad 60 a 64 años	40.597	28
- Menor 60 sin cargas	30.066	28
- Con cargas familiares	12.260	60
Orfandad	117.243	28
Favor familiares	17.379	28

La comparación de estos incrementos a efectos de valorar la ganancia de poder adquisitivo, hay que hacerlo con el incremento del Índice de Precios al Consumo en el mismo período, que ha sido del 12,6 por ciento,

En el período considerado existen además grupos de perceptores de **pensiones mínimas a los que se han reconocido nuevos derechos** que previamente no tenían, tales como los pensionistas de Incapacidad permanente total con edades entre 60 y 64 años a partir de 2006, y las viudas con cargas familiares desde el año 2007, cuya cuantía ha experimentado un incremento del 22,31 en 2008 al equipararse a la de los jubilados de menos de 65 años sin cónyuge a cargo.

El nivel que suponen **los importes de las pensiones mínimas puede medirse en relación con las cuantías del Salario Mínimo Interprofesional**. La relación entre los dos importes medido en términos netos, es decir deduciendo las cotizaciones a cargo del trabajador, presenta las siguientes cifras (en %) :

Clase de pensión	Con cónyuge a cargo	Sin cónyuge a cargo
Jubilación ≥ 65	117,24	94,06
Jubilación < 65	109,57	87,65
Incapacidad permanente	117,24	94,06
Viudedad		
- Mayor 65 años o discapacitado		94,06
- Edad entre 60 a 64 años		87,65
- Menor de 60 sin cargas		69,94
- Con cargas familiares		109,57



Para analizar la evolución del porcentaje de pensiones en la cuantía mínima hay que considerar la incidencia de dos factores de signo contrario: uno, que tiende a disminuir dicho porcentaje porque aumentan los niveles de pensión de cada año, a causa de los mayores períodos de cotización y de mayores salarios, y otro que tiende a aumentarlo debido a los incrementos adicionales de sus cuantías en la revalorización de cada año, que hace que más pensionistas las perciban, sobre todo, los pensionistas de más edad que son los que presentan cuantías de pensión más bajas.

Evolución de la pensión media de jubilación

La mejora en el nivel medio de pensiones en el tiempo puede observarse mediante la comparación de la pensión media de los pensionistas en vigor con la pensión media de las nuevas altas. A efecto de esta comparación la pensión más representativa es la pensión de jubilación que presenta las siguientes cuantías:

Pensión media de jubilación (euros mes)

	1995	2000	2005	2007
Pensiones en vigor	443,96	539,18	688,68	770,62
Nuevas pensiones	535,58	644,86	828,13	994,34

A medida que se va produciendo la renovación del colectivo al extinguirse pensiones antiguas de cuantía más baja por nuevas pensiones de cuantía más alta, se va elevando paulatinamente en el tiempo el nivel de la pensión media.

Si se observa **la cuantía media de las pensiones de jubilación en vigor según género**, la distribución es la siguiente:

Pensión media jubilación pensiones en vigor (euros mes)

	1995	2000	2005	2007
Varones	495,93	604,14	782,99	875,34
Mujeres	308,83	380,65	481,05	525,57
Total	443,96	539,18	688,68	770,62

Las cifras por género para las nuevas pensiones, son las siguientes según la información disponible:

Pensión media de jubilación de nuevas altas

	2002	2005	2007
Varones	839,50	1.028,76	1.177,91
Mujeres	466,67	483,40	650,16
Total	712,47	828,13	994,34

Evolución de las pensiones con garantía de mínimos.



Si se efectúa el **análisis por género en relación con las pensiones con garantía de mínimos**, las mujeres presentan una mayor incidencia en el número de dichas pensiones derivado fundamentalmente de sus trayectorias de cotización y salariales. Esta situación se refleja tanto para las pensiones en vigor como para las nuevas pensiones.

Para las pensiones en vigor la información disponible en relación con el número de pensiones mínimas es el siguiente:

Número de pensión en vigor con garantía de mínimo

Pensiones con mínimos	2002	2005	2007
Varones	894.156	847.386	858.041
Mujeres	1.479.370	1.350.782	1.349.707
Total	2.373.526	2.198.168	2.249.707

El porcentaje de pensiones mínimas sobre el total de pensiones en vigor es de un 27 por ciento, porcentaje que supone un 21,1 por ciento para varones y un 32,5 por ciento para mujeres.

Para las nuevas pensiones, las cifras son las siguientes:

Número de nuevas pensiones con garantía de mínimo

Pensiones con mínimos	2002	2005	2007
Varones	28.710	26.246	24.273
Mujeres	71.816	69.757	70.153
Total	99.526	96.003	94.426

El porcentaje de pensiones mínimas de las nuevas pensiones sobre el total de altas es del 20,2 por ciento del total en 2007, cifra que fue del 10,0 para varones y del 31,0 para mujeres.

En relación con el porcentaje de pensiones que reciben complementos a mínimo, el resumen de lo expuesto con cifras de 2007 es el siguiente:

Porcentaje de pensiones con mínimos

	En vigor	Nuevas altas
Varones	21,1	10,0
Mujeres	32,5	31,0
Total	27,0	20,2

Las cifras del cuadro anterior indican que a nivel de adecuación mientras que para el total de pensiones existentes en 2007 un 27 por ciento tenían reconocido el complemento a mínimo, para las nuevas pensiones, dicha cifra fue del 20 por ciento únicamente, lo que indica que los niveles de pensión de entrada son superiores y por



tanto necesitan menos complementos a mínimo, y que ésta situación se irá consolidando en el tiempo cuando el colectivo actual vaya siendo sustituido por el de nuevos pensionistas.

Analizando las cifras según género, el porcentaje del número de pensiones con mínimo para las mujeres es ligeramente inferior para las nuevas pensiones, lo que indica la necesidad de seguir incrementando la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo y su permanencia en él, así como eliminar la diferencia en el nivel de salarios que existe actualmente con respecto a los varones. En el apartado de sostenibilidad financiera se hará mención específica a este respecto.

Otros colectivos específicos a considerar en el ámbito de las mejoras adicionales de las **pensiones de cuantía más bajas**, son el de las pensiones no contributivas y el de las pensiones a extinguir del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), de pensiones asistenciales a enfermos y ancianos, y las de la extinguida Ley de Integración Social de los Minusválidos éstas dos últimas a extinguir.

Se puede resumir que el total de beneficiarios de las políticas de garantía de ingresos mínimos a través del Sistema de protección social, en lo que se refiere a pensiones en el año 2007 eran los siguientes:

Beneficiarios política ingresos mínimos

	2007
Pensión mínima	2.249.707
Pensión no contributiva	456.797
S.O.V.I.	434.237
Otros beneficiarios	63.543
TOTAL	3.204.314

También para estas pensiones ha habido una mejora de poder adquisitivo a través de las revalorizaciones practicadas, ya que para el período 2004-2008 las pensiones no contributivas y las pensiones S.O.V.I. han experimentado un incremento del 18,9 por ciento, frente a un incremento del I.P.C. en ese período del 12,6 por ciento.

Relacionado con la situación de discapacidad, los importes de las prestaciones familiares por hijos discapacitados han presentado un incremento del 22,5 por ciento en el período 2004-2008.

El conjunto de prestaciones anteriores, tiene condicionado su derecho a la prueba de recursos, toda vez que el reconocimiento de sus cuantías está supeditado a la existencia limitada de otro tipo de ingresos distintos al de la pensión.

Otros aspectos relacionados con la adecuación: Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

La entrada en vigor a partir de 1 de enero de 2008 de la mencionada Ley 40/2007, de 4 de diciembre. de medidas en materia de Seguridad Social ha supuesto el



establecimiento de nuevas medidas que afectan a los requisitos para el acceso a la pensión, al nivel de las pensiones y a la intensificación de los incentivos para prolongar de forma voluntaria la vida activa más allá de los 65 años.

En relación con los **requisitos para acceder al derecho a las pensiones**, la reforma introduce por un lado mayores criterios de flexibilidad en cuanto al período mínimo de cotización que facilite el acceso a la pensión de incapacidad permanente a los trabajadores más jóvenes, y por otro se refuerza la correlación entre cotizaciones y prestaciones en la pensión de jubilación, al computarse para acreditar el período mínimo de cotización únicamente los días efectivos de cotización y no los correspondientes a las pagas extraordinarias.

En cuanto al nivel de las pensiones se refuerza el **carácter contributivo de las pensiones de incapacidad permanente**, ya que, cuando las mismas derivan de una enfermedad no profesional, su cuantía vendrá afectada por un nuevo porcentaje que se relaciona con los años de cotización acreditados por el trabajador en el momento de declararse la incapacidad, situación que no se aplicaba antes. Dichos porcentajes son los mismos que se utilizan para el cálculo de la pensión de jubilación en función de los años cotizados. A su vez, se modifica el cálculo del complemento de Gran Invalidez se modifica también para desvincular su importe del de la pensión de incapacidad permanente absoluta y hacer que su resultado sea más solidario para los pensionistas, al no depender de la pensión contributiva que se haya generado.

Las nuevas medidas que incentivan **la prolongación de la vida laboral** introducen mejoras sobre la situación anterior al reconocerse un incremento adicional de la pensión de entre un 2 y un 3 por ciento por cada año cotizado después de los 65. El 3 por ciento se aplica si se acreditan cuarenta años de cotización al cumplir los 65 de edad. Estos incrementos de la pensión se reconocen siempre que, accediendo a la pensión con una edad superior a los 65 años, se reúne el período mínimo de cotización de quince años (antes sólo se aplicaba con 35 años cotizados). A partir de enero de 2008 también pueden tener incrementos adicionales de pensión, a diferencia de lo que sucedía antes, los perceptores de la cuantía máxima de pensión,

En la **pensión de viudedad la reforma en cuanto a la adecuación** supone el acceso al derecho por parte de las parejas de hecho que acrediten un período mínimo de convivencia, y estén inscritos en el correspondiente Registro Oficial con una antelación como mínimo de dos años a la fecha del fallecimiento siempre que el sobreviviente dependiese parcialmente de los ingresos del fallecido.

Si existiese separación o divorcio en el momento del fallecimiento, se reconocerá únicamente la pensión de viudedad a quien acredite que venía percibiendo la pensión compensatoria definida en el artº. 97 del Código Civil, y que la misma se extingue por fallecimiento del causante. Cuando no se acredita derecho a la pensión de viudedad por no existir un período mínimo de un año de matrimonio con el causante, se tiene derecho a una prestación temporal de viudedad con duración de dos años.



Con independencia del contenido expresado en relación con la reforma que se ha iniciado en enero de 2008, está prevista **una continuidad en el proceso de negociación** que permita abrir nuevas vías de reforma en la presente legislatura a través de la renovación parlamentaria del Pacto de Toledo, cuya Comisión comenzará los correspondientes trabajos de elaboración de nuevas Recomendaciones a futuro, a partir de octubre de 2008.

Desde el año 2004 se ha seguido también una **política de recuperación de poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional** perdido en años anteriores, de forma que en el período 2004-2008 el importe mensual ha pasado de suponer 460,5 euros mes en enero de 2004 a 600 euros mes en enero de 2008, con una subida del 30 por ciento, lo que supone, en su efecto trasladado a las bases de cotización, que las pensiones que se generan en el futuro por trabajadores que perciben el salario mínimo verán incrementado su importe a consecuencia de aquel aumento.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, introdujo normas dirigidas a integrar la **igualdad efectiva de hombres y mujeres** en la asunción de las obligaciones familiares y contiene elementos que afectan fundamentalmente a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y al reconocimiento como período cotizado en distintos supuestos de suspensión del contrato de trabajo por cuidado de hijos o familiares.

Las medidas concretas se relacionan con la reducción de la jornada por cuidado de menores o personas con discapacidad, el reconocimiento del derecho del padre a disfrutar el permiso de maternidad en caso de fallecimiento de la madre, la ampliación de dos semanas del permiso de maternidad en caso de nacimiento o adopción de hijo discapacitado, el **reconocimiento de un permiso de paternidad autónomo** del de la madre, de 15 días de duración y las prestaciones derivadas del riesgo de lactancia en determinados puestos de trabajo.

En relación con el **reconocimiento como períodos cotizados a efectos del derecho a pensión**, los supuestos fundamentales se refieren a flexibilizar el período mínimo de cotización que se exige para acceder al permiso de maternidad para trabajadoras jóvenes menores de 26 años; a considerar, como cotizados a jornada completa los supuestos de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares y a considerar como cotizada la totalidad de jornada de trabajo en los supuestos de excedencia por cuidado de hijos o familiares.

En lo que se refiere **al ámbito de la previsión social complementaria**, la estructura de las pensiones públicas no ha cambiado en España, por lo que las pensiones profesionales del segundo pilar, potenciadas normalmente a través de convenios colectivos, siguen siendo de carácter voluntario y libre, no sustituyen en ningún caso a las pensiones públicas y obligatorias del primer pilar y constituyen una forma de complementar la pensión pública con carácter voluntario.



Este tipo de pensiones privadas del segundo pilar, que se denomina “de empleo” sigue sin tener una incidencia importante ya que del total de partícipes inscritos en alguna de las tres modalidades de Fondo de Pensiones denominadas “Individual” “De empleo” y “Asociado”, únicamente el 17 por ciento corresponden a sistemas de empleo, aunque éste porcentaje ha ido en aumento ya que en el año 2000 estaba situado en el 9 por ciento. Un efecto derivado de la Ley Orgánica 3/2007, en el ámbito de las pensiones privadas, ha sido la entrada en vigor del Real Decreto 1361/2007, que modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados en relación con los factores actuariales, de forma que se evite generar en determinados supuestos diferencias por razón de género en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.

Por último, las últimas modificaciones fiscales aprobadas han concentrado los beneficios fiscales de los planes y fondos de pensiones en los supuestos de disfrute de las mismas como renta vitalicia, en detrimento de su rescate en un pago único.



ESTRATEGIA NACIONAL PARA PENSIONES.

Revisión de la sostenibilidad financiera del Sistema de pensiones.

Desde la elaboración del anterior informe en 2005, el comportamiento de los resultados en el sistema de pensiones ha seguido el camino del superávit que se venía observando ya en años anteriores y ha permitido así continuar con dotaciones adicionales al Fondo de Reserva, que constituye uno de los factores importantes para la sostenibilidad del Sistema para equilibrar los resultados negativos que puedan producirse en el futuro.

La consecución de los superávits se ha originado fundamentalmente por el comportamiento del mercado de trabajo que ha seguido una senda ascendente, aunque con una contención en su crecimiento desde el año 2007, contención que se mantiene también para el año 2008 y con una previsión de disminución en el año 2009, año a partir del cual se espera que se vuelvan a recuperar los niveles de crecimiento potencial. Aún con este comportamiento del empleo, en 2008 y 2009 se seguirán produciendo superávits si bien más atenuados que en los años anteriores.

Este comportamiento previsto del empleo se corresponde con la evolución de la economía, que está siendo afectada fundamentalmente por el deterioro de la situación internacional originada por el encarecimiento del precio del petróleo y otras materias primas, y la crisis financiera y de la situación interna por el problema inmobiliario, entre otros factores, lo que va a ocasionar menores incrementos del Producto Interior Bruto y, por tanto, del empleo y de la productividad hasta finales de 2009, fecha a partir de la cual se espera que la evolución de la economía se vaya acercando a su nivel potencial de crecimiento.

Hasta el año 2007 la tasa de empleo ha seguido una senda ascendente, tanto para el grupo de edad general de 16 a 64 años como para el grupo específico de 55 a 64 años.

La tasa de empleo y paro para el grupo de edades de 16 a 64 años distribuidas entre varones y mujeres presentan las siguientes cifras:

Tasa de empleo			
16-64 años	2000	2005	2007
Varones	72,12	76,38	77,38
Mujeres	42,03	51,92	55,50
Total	57,11	64,26	66,57

Tasa de paro			
(16-64 años)	2000	2005	2007
Varones	9,61	7,08	6,41
Mujeres	20,50	12,20	10,89
Total	13,94	9,20	8,31

La tasa de empleo total en el período 2000-2007 ha experimentado un incremento de 9,5 puntos porcentuales, al pasar de 57,11 en el año 2000 a un 66,57 en el año 2007. Paralelamente la tasa de paro se ha reducido en 5,6 puntos en el período al pasar de un 13,94 en 2000 a un 8,31 en el 2007.



Este comportamiento positivo del mercado de trabajo ha sido más intensivo para las mujeres, ya que su tasa de empleo se ha incrementado en 13,5 puntos porcentuales entre 2000 y 2007, año en el que alcanza un 55,5. Un efecto similar se observa en la tasa de paro, que ha disminuido en 9,6 puntos porcentuales con cifras de 20,50 por ciento en 2000 y 10,89 por ciento en 2007.

El análisis de estas cifras pone de manifiesto el importante crecimiento que ha tenido el empleo total, y particularmente el empleo de las mujeres, que ha permitido mejorar su situación relativa si bien manteniendo todavía un diferencial importante con respecto al de los varones, lo que muestra la necesidad de seguir intensificando las medidas dirigidas a fomentar el empleo femenino, medidas que se indican más adelante.

Una situación similar a la del empleo total, se observa si se tienen en cuenta el **grupo de edades de 55 a 64 años**, para el cual las cifras son las siguientes:

Tasa de empleo			
55-64 años	2000	2005	2007
Varones	54,94	59,73	59,99
Mujeres	20,15	27,43	30,04
Total	37,02	43,13	44,59

Tasa de paro			
55-64 años	2000	2005	2007
Varones	8,68	5,44	4,88
Mujeres	11,26	7,48	7,70
Total	9,42	6,12	5,87

La tasa de empleo total se sitúa en un 44,59 en 2007, con un incremento de 7,5 puntos porcentuales con respecto al año 2000. Para las mujeres la tasa es de 30,04 en 2007, con un incremento de 10 puntos porcentuales respecto a 2000.

El buen comportamiento del mercado de trabajo, ha tenido su reflejo en **el número de afiliados al sistema de la Seguridad Social**, que desde el año 2005 ha seguido manteniendo incrementos continuos, si bien atenuados desde el año 2007. El total de afiliados creció un 4,42 en el año 2005, un 4,27 en el 2006 y un 3,04 en el año 2007.

La desaceleración en el crecimiento se está manifestando también en 2008, con un crecimiento del 0,45 por cien en el período enero-julio sobre la media del ejercicio anterior. Esta contención en el incremento del número de afiliados es previsible que se mantenga hasta el año 2009, ya que a partir del segundo semestre de dicho año y según las previsiones macroeconómicas del Gobierno se recuperará la actividad económica y por tanto el crecimiento del empleo. A pesar de la disminución en la afiliación, el superávit del sistema de pensiones para 2008 se atenderá a las previsiones presupuestarias.

La evolución de la afiliación hasta finales del año 2007 ha venido marcada por la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo y un incremento continuo del número de trabajadores extranjeros.

En la **evolución de los afiliados por género** las cifras correspondientes a varones y mujeres son las siguientes:



Número de afiliados

Año	Varones		Mujeres		Total	
	Número	%	Número	%	Número	%
2000	9.446.100	62,0	5.790.118	38,0	15.236.218	100
2005	10.674.677	58,8	7.481.505	41,2	18.156.182	100
2007	11.065.545	57,6	8.130.210	42,4	19.195.755	100

La participación de las mujeres en la afiliación ha pasado de suponer el 38 por ciento del total en el año 2000 a un 42,4 por ciento en el 2007.

En cuanto a los trabajadores extranjeros, su participación en el total afiliados ha pasado de un 2,97 por ciento del total en el año 2000, a un 9,30 por ciento en 2005 y un 10,32 en el 2007. El número total de extranjeros según su procedencia presenta las siguientes cifras:

Año	Procedentes U.E.	Procedentes resto mundo	Total afiliados extranjeros
2000	140.391	311.706	452.097
2005	284.149	1.404.449	1.688.598
2007	672.087	1.309.019	1.981.106

Del total de afiliados extranjeros en el año 2007 el 34 por ciento pertenecen a países de la Unión Europea y el 66 por ciento a países no U.E. De los países no pertenecientes a la Unión Europea el mayor porcentaje de inmigrantes corresponden a Marruecos, Ecuador, Colombia y Perú. Del total de 1.981.106 afiliados extranjeros el 61 por ciento son varones y el 39 por ciento mujeres. **En relación con los niveles salariales de los extranjeros**, según la Encuesta de Estructural Salarial de los años 2004 y 2005, los niveles relativos de ganancia anual según procedencia de los trabajadores fueron los siguientes en euros:

	2004	2005
España	18.497,55	18.905,66
Unión Europea	17.775,83	18.238,64
América latina	13.203,10	13.686,29
Resto del mundo	14.130,75	14.606,26

La incidencia que en el total de afiliados a la Seguridad Social tiene la evolución del componente de género y grupo de edad se indica en los siguientes cuadros para el período 2005-2008:



▪ **Distribución por género de cada grupo de edad período 2005 - 2008:**

AÑO 2005			
Edad	Varones	Mujeres	Total
16-54 años	57,98	42,02	100,00
55-64 años	65,45	34,55	100,00
> 65 años	58,46	41,54	100,00
Total	58,79	41,21	100,00

AÑO 2008(Mayo)			
Edad	Varones	Mujeres	Total
16-54 años	56,55	43,45	100,00
55-64 años	63,33	36,67	100,00
> 65 años	59,37	40,63	100,00
Total	57,34	42,66	100,00

▪ **Distribución por géneros y grupo de edad sobre el total de afiliados:**

AÑO 2005			
Edad	Varones	Mujeres	Total
16-54 años	51,37	37,22	88,59
55-64 años	7,11	3,75	10,86
> 65 años	0,32	0,23	0,55
Total	58,79	41,21	100,00

AÑO 2008 (Mayo)			
Edad	Varones	Mujeres	Total
16-54 años	49,78	38,26	88,04
55-64 años	7,21	4,17	11,38
> 65 años	0,34	0,24	0,58
Total	57,34	42,66	100,00

En estos cuadros se pone de manifiesto como se ha incrementado la proporción de mujeres en todos los grupos de edad, especialmente en el grupo de 16 a 54 años

La estructura por género y grupo de edad de los afiliados extranjeros muestra diferencias con respecto al total afiliados, al tratarse de poblaciones más jóvenes, tal como se puede observar en el siguiente cuadro con cifras de mayo de 2008:

AÑO 2008			
Distribución porcentual por género y grupo de edad			
Edad	Varones	Mujeres	Total
16-54 años	59,97	40,03	100,00
55-64 años	58,13	41,87	100,00
> 65 años	66,46	33,54	100,00
Total	59,92	40,08	100,00

AÑO 2008			
Distribución por género y grupo de edad sobre total afiliados			
Edad	Varones	Mujeres	Total
16-54 años	57,54	38,40	95,94
55-64 años	2,19	1,57	3,76
> 65 años	0,20	0,10	0,30
Total	59,92	40,08	100,00

Para el total de afiliados en mayo de 2008, el 57,34 por ciento eran hombres y el 42,66 mujeres. Para los extranjeros dichos porcentajes eran de 59,92 y 40,08 respectivamente. Por grupos de edad, el 88,04 por ciento de total de afiliados estaban en el grupo de 16 a 54 años, mientras que para los extranjeros dicho porcentaje es de 95,94

La mejora en el comportamiento del mercado de trabajo y en la afiliación de la Seguridad Social que se ha reflejado en las cifras anteriores ha sido consecuencia, de un lado del buen comportamiento de la economía hasta el año 2007, y de otro de las medidas de apoyo al fomento del mercado de trabajo que se han afianzado desde el año 2006 gracias al **Acuerdo**, firmado en abril de 2006, con los interlocutores sociales, y que ha sido el origen de la **Ley 43/2006, de 29 de diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo**, cuyo objetivo era superar los problemas del mercado de trabajo español mejorando la reducida tasa de ocupación y actividad de las mujeres



españolas, las elevadas tasas de paro sobre todo de los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, la segmentación del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos y sobre todo la alta tasa de temporalidad, que afecta fundamentalmente entre otros grupos, a los trabajadores de menores salarios y con discapacidad.

Las medidas de esta Ley van orientadas a conseguir los siguientes objetivos:

- Impulsar y apoyar el empleo, la contratación indefinida y la conversión de empleo temporal en empleo fijo, a través de medidas de bonificación en las cotizaciones.
- Limitar la utilización sucesiva de contratos temporales, y reforzar los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo a través de la participación de los interlocutores sociales en la definición de objetivos.
- Reforzar las políticas activas de empleo y mejorar la protección de los trabajadores ante la falta de empleo.

En la citada Ley se incluye un apartado específico relativo a un **nuevo Programa de Fomento del Empleo** cuya finalidad fundamental es impulsar la utilización de la contratación indefinida inicial por parte de las empresas, con objeto de fomentar la contratación estable, objetivo que se piensa cumplir efectuando una mejor selección de los colectivos beneficiarios, simplificando las cuantías de las bonificaciones, ampliando la duración de los incentivos para mantener el empleo y sustituyendo los porcentajes de bonificación actuales por cuantías fijas. Los beneficiarios de las medidas son los siguientes:

- **Todo el colectivo de trabajadores** con un Plan extraordinario para convertir contratos temporales en indefinidos antes de 1 de enero de 2007. La bonificación a las empresas consiste en una cuantía anual de 800 euros durante 3 años.
- Para el colectivo de **jóvenes entre 16 y 30 años** la bonificación por contratación inicial indefinida es de 800 euros año durante un período de cuatro años.
- Para el colectivo de **mujeres desempleadas**, contratadas en los 24 meses siguientes al parto o contratadas después de cinco años de inactividad laboral, la bonificación empresarial oscila entre 850 y 1.200 euros año durante un período de 4 años.

Para **mujeres que se reincorporan tras la maternidad ó víctimas de violencia de género ó doméstica** la bonificación es de 1.200 euros durante cuatro años y 600 euros durante toda la vigencia del contrato respectivamente.

- Para la contratación indefinida de **personas con discapacidad**, y en supuestos excepcionales de contratación temporal las bonificaciones oscilan entre 3.500 y 6.300 euros año durante toda la vigencia del contrato. Las bonificaciones de



mayor importe corresponden a las personas con discapacidad severa, las mujeres y a las personas mayores de 45 años.

Si el discapacitado es contratado temporal o indefinidamente en algún centro especial de empleo se bonificará el 100 por cien del total de las cuotas empresariales durante toda la vigencia del contrato.

Para las personas que se encuentran en **situación de exclusión social**, la bonificación es de 500 ó 600 euros al año según el tipo de contrato.

- Para la **contratación indefinida de mayores de 45 años**, la bonificación es de 1.200 euros al año durante toda la vigencia del contrato.

Para conseguir el mantenimiento del **empleo indefinido en las personas mayores**, los contratos con personas de 59 ó más años que llevan cuatro años en la empresa, se bonificarán con el 40 por ciento de la cotización empresarial, con un incremento anual del 10 por ciento hasta alcanzar el 100 por cien de bonificación con 65 años.

El resultado de las medidas de fomento del mercado de trabajo ha sido que en el año 2007, existían 1.550.000 de contratos de trabajo con bonificación empresarial.

Otras iniciativas que se han tomado en los últimos años en relación con el mercado de trabajo son las siguientes:

- Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre que regula el régimen de las **empresas de inserción que se dedican a contratar a excluidos sociales** con objeto de que después de aplicar las correspondientes medidas sociales y de adaptación profesional, puedan incorporarse al mercado laboral ordinario. El colectivo principal al que se dirige esta norma es el de los perceptores de rentas mínimas de inserción, que beneficia a unas 200.000 personas.
- Real Decreto 1722/2007 de 21 de diciembre de desarrollo del **Sistema nacional de Empleo** cuyo objetivo fundamental es incrementar la eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo. Estos objetivos se pretenden conseguir a través de la cooperación y coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.
- **Medidas laborales incluidas en la Ley Orgánica 3/2007**, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Estas medidas se refieren básicamente a la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan medidas de acción positiva que favorezcan el acceso al empleo de las mujeres, mejoren la formación y la empleabilidad de las mujeres y su permanencia en el mercado de trabajo, y el reconocimiento al derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. También se establecen medidas específicas para prevenir el acoso sexual



en el trabajo, creación de un distintivo para empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y el reconocimiento de acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.

Para contrarrestar los efectos que sobre la creación de empleo está produciendo la actual situación económica, se ha aprobado en el presente año 2008 un **Real Decreto Ley de medidas urgentes de impulso a la actividad económica** para hacer frente a la desaceleración en el crecimiento de la economía.

Esta desaceleración, que afecta fundamentalmente a los sectores de la construcción e inmobiliario está originando un incremento del paro registrado, frente a lo cual el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha aprobado un Plan Extraordinario de orientación, formación profesional e Inserción laboral con objeto de hacer frente al repunte del volumen de desempleados, reforzar los mecanismos de apoyo al acceso de empleo facilitando el trasvase de los trabajadores de estas actividades y de los desempleados hacia sectores que continúan demandando mano de obra cualificada y no cualificada. Este Plan concebido con carácter temporal tiene previsto aumentar la atención hasta medio millón más de desempleados con coste total de 201 millones de euros.

Para atender esos objetivos se utilizan los denominados “itinerarios personalizados” para lo cual se crea una red de atención personalizada y directa de los desempleados, con la contratación de 1.500 orientadores profesionales que se encargarán de elaborar itinerarios personalizados para facilitar su acceso de nuevo a un empleo. Se potencia también el programa de promoción del empleo autónomo especialmente el dirigido a facilitar el establecimiento por cuenta propia de los mayores de 45 años.

En relación con los **resultados del sistema de pensiones**, en los últimos años se ha mantenido **el superávit** que se venía produciendo desde el año 1999, lo que ha permitido a su vez seguir con las dotaciones al Fondo de Reserva. Medido en términos del P.I.B., dicho superávit ha sido el siguiente:

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
0,55	0,89	0,93	1,26	1,10	1,14	1,30	1,34

Estos resultados de superávit, se han conseguido también por el buen comportamiento de otros indicadores tales como:

- **La reducción en el nivel de morosidad**, que descendió en el 2007 al 1,06 por ciento en la línea de acercamiento al objetivo del 1 por ciento, establecido en el Acuerdo social, de julio de 2006, resultado que se ha conseguido gracias a los mecanismos de la lucha contra el fraude y las campañas de concienciación social.
- **Paulatina mejora de la relación activos-pasivos** que se ha comportado positivamente en una senda creciente que ha pasado del 2,2 en el año 2000 a un 2,5 en 2005 y un 2,7 en el año 2007.



- Una **edad media de entrada de jubilación de 63,66 años** en el período enero-mayo de 2008, edad muy cercana a la edad de 65 años, y que ha ido creciendo desde 2006 año en el que estaba situada en 63,47 y 2007 situada en 63,57. El aumento de esta edad media se ha debido fundamentalmente a un menor porcentaje de jubilaciones anticipadas y un mayor número de altas con más de 65 años derivadas de las medidas para prolongar la vida activa.
- La contención en la evolución del gasto corriente, el sometimiento de las entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social a controles más rigurosos y la mejora en el control de las situaciones de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.

Estos resultados positivos han permitido **incrementar las dotaciones al Fondo de Reserva** que alcanzan en este momento un total de 56.000 millones de euros, lo que supone un 5,32 por ciento del P.I.B. y servirían para cubrir el pago de nueve mensualidades de la nómina de pensiones.

La practica totalidad del Fondo está invertido en activos financieros públicos, y la cartera está distribuida en 54 por ciento de activos emitidos por el Reino de España y un 46 por ciento de deuda de Alemania, Francia y Países Bajos. A finales de 2007 la cartera de activos estaba formada en un 14,65 por ciento en letras de zona corto plazo, un 35,75 por ciento de zona a 3 años, un 22,68 por ciento en zona a 5 años y un 26,92 por ciento en zona a 10 ó más años. Al final de 2007 la rentabilidad acumulada del fondo ascendió a un 3,99 por ciento.

Asimismo, se ha producido un incremento sostenido tanto de las reservas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como de los fondos de la Seguridad Social que se nutren de los excedentes de las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que alcanzarán en 2008 una cuantía cercana a los 3.000 millones de euros.

En relación con la sostenibilidad financiera, y para afianzar el equilibrio futuro de nuestro sistema de pensiones, **la última reforma de pensiones** se contiene en la mencionada Ley 40/2007 que ha introducido las siguientes medidas:

- Para la **pensión de jubilación** se han modificado las condiciones de acceso a la **jubilación parcial**, de forma que se evita la utilización indebida que se venía produciendo para esta prestación y que no respondía a los fines para los que fue creada. La edad de acceso pasa de 60 a 61 años para los trabajadores afiliados al sistema después del 1 de enero de 1967; la reducción de jornada queda establecida entre un 25 y un 75 por ciento del total, y se exige unos períodos mínimos de cotización de seis años en la última empresa y treinta durante toda la vida laboral que antes no existían, lo que refuerza el carácter contributivo de esta pensión.



Con objeto de **no incentivar la posibilidad de jubilación anticipada**, cuando se proponga la reducción de la edad de jubilación por trabajos penosos, tóxicos o peligrosos a nuevos grupos de actividad profesional, ese derecho quedará condicionado a que se modifiquen las condiciones específicas de cotización de dichos grupos para autofinanciar el mayor coste y preservar así el equilibrio económico financiero del sistema. En ningún caso la edad de acceso a la jubilación podrá ser menor de cincuenta y dos años.

Las nuevas medidas sobre prolongación de la vida activa más allá de los 65 años, que se han mencionado en el apartado de la adecuación, contribuirán también a la sostenibilidad del sistema de pensiones, en la medida en que permitirán reducir el período de pago de la pensión en el tiempo en que se prolongue la actividad más allá de los 65 años.

- El reforzamiento de la **contributividad en la pensión de incapacidad permanente**, mencionado en el apartado de adecuación, será también un factor de disuasión para el acceso a esta pensión en edades altas, toda vez que la introducción del porcentaje a aplicar según años cotizados a la cuantía de la pensión, hará que conseguir esta pensión no sea tan atractiva como lo era antes.
- También se prevé que exista una **contención en el gasto de la pensión de viudedad**, al limitar el derecho a la pensión en el caso de que exista divorcio, a que hubiera habido obligación por parte del fallecido de pagar una pensión compensatoria que desaparece a consecuencia de su fallecimiento.

La situación descrita hasta el momento presente hay que contemplarla también en una perspectiva de futuro a la luz de las previsiones de nuevas reformas que se irán planteando a partir del último trimestre del presente año en los trabajos que se inicien de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y que tendrán que efectuarse en el marco de los resultados de las nuevas proyecciones de gastos e ingresos que se realizan por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Resultado de las proyecciones de ingresos y gastos del sistema de pensiones

Las Recomendaciones derivadas del proceso de concertación en el que se ha basado el Pacto de Toledo desde sus inicios, indican la necesidad de que se efectúen revisiones periódicas sobre la evolución económico-financiero del sistema de pensiones y se elaboren las correspondientes proyecciones a largo plazo que permitan situar a futuro, de un lado, el comportamiento específico del gasto en pensiones en relación con el peso que el gasto de las mismas vaya teniendo en proporción del Producto Interior Bruto y, de otro, situar el punto de equilibrio futuro entre el total ingresos y el total gastos, que permita fijar el margen de maniobra del que se dispone en cada momento para efectuar la correspondiente reforma y consolidar sus efectos.



Las últimas proyecciones nacionales se efectuaron en el año 2005, y sus resultados se incorporaron al Informe de estrategia de España en relación con el futuro de las pensiones, que se remitió a Bruselas en julio de 2005. Los resultados de dichas proyecciones han servido de marco para la reforma que se contiene en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, y de cuyo contenido concreto se han efectuado los correspondientes comentarios en cada apartado del presente Informe.

Siguiendo con el proceso dinámico de reforma, en este segundo semestre de 2008 se iniciarán nuevas rondas de reuniones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, para fijar las nuevas Recomendaciones que refuercen la garantía del futuro equilibrio del sistema de pensiones frente al problema del envejecimiento. En este proceso, se han efectuado también nuevas proyecciones de ingresos y gastos, cuyos resultados servirán de apoyo en la toma de decisiones sobre la nueva reforma.

En este ejercicio de proyecciones, **en una primera fase** se ha obtenido el importe del gasto en pensiones por un lado, y de los ingresos por cotizaciones sociales por otro, para lo que se han utilizado las hipótesis de las proyecciones demográficas de la población general elaboradas por Eurostat, y las variables relacionadas con las hipótesis macroeconómicas del escenario facilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda, y que son coincidentes con las propuestas por el subgrupo de envejecimiento del Comité de Política Económica de la U.E..

Estas hipótesis macroeconómicas se han adaptado, en el período 2008-2011, a las variables nacionales que se derivan de las cifras correspondientes a la previsión de liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social para 2008 y al Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 2009, así como del escenario macroeconómico del objetivo de estabilidad presupuestaria 2009-2011.

Los resultados de la proyección correspondientes a la relación gasto-PIB y cuotas PIB y su comparación con las cifras de 2005 son los siguientes:

Importes en relación con el PIB

	2005		2008	
	Pensiones	Cuotas	Pensiones	Cuotas
2005	7,71	9,31	7,59	9,71
2010	7,74	9,01	8,34	9,86
2015	7,91	8,59	8,47	9,78
2020	8,30	8,60	8,64	9,74
2030	10,09	8,60	10,33	9,74
2040	12,93	8,60	13,39	9,74
2050	14,51	8,60	15,32	9,74
2060	---	---	14,11	9,74



En la comparación de resultados hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

En las cotizaciones sociales, tal como se deduce del cuadro anterior, el importe de las cuotas es sensiblemente superior en esta proyección a la realizada en 2005, derivado fundamentalmente de dos factores:

- Por un lado, las cifras reales de empleo en el período 2005-2007, han sido sensiblemente superiores a las previstas en la proyección de 2005. Las previsiones macroeconómicas en aquel momento situaban el crecimiento del empleo en el 2,3; 2,3 y 2,6 para los años 2005, 2006 y 2007, y la realidad, derivada del importante crecimiento económico de dichos años, ha supuesto que dichos incrementos se hayan situado en el 3,2; 3,2 y 3,0 respectivamente. Esta diferencia, trasladada al colectivo de cotizantes ha supuesto un mayor número de 491.377, 718.735 y 852.342 cotizantes, para cada uno de dichos años.
- Por otro lado y en relación con el aumento potencial del empleo más allá del año 2010, las hipótesis del comportamiento del empleo son ahora mayores que las de 2005.

Las cifras de proyección del gasto en pensiones se mantienen estables hasta el año 2020, en cuantías que se sitúan alrededor de un 8,5 por ciento del PIB. Por otro lado la mayor intensidad del efecto del proceso de envejecimiento se manifestará previsiblemente a partir del año 2030.

En relación con los resultados obtenidos, hay que indicar la sensibilidad que en los resultados del porcentaje de gasto sobre el PIB, tienen las variaciones a corto plazo de esta última magnitud. Por ejemplo, ante un gasto consolidado y prácticamente fijo en pensiones en 2008, 2009 y 2010, una modificación a la baja del PIB supone un aumento en el indicador del gasto en pensiones.

Hay que considerar también que en el gasto en pensiones se incluye la parte del complemento para garantizar la cuantía de la pensión mínima, que actualmente está financiada parcialmente por los Presupuestos Generales del Estado, en una secuencia que finalizará en 2013, año a partir del cual dicha financiación será ya completa.

En una segunda fase se determina la secuencia de total gastos y total ingresos, con objeto de conocer durante cuanto tiempo los ingresos serán superiores a los gastos, y por tanto se seguirá alimentando el Fondo de Reserva, y a partir de que año la insuficiencia de ingresos requerirá de la utilización de dicho Fondo hasta su extinción, año a partir del cual se comenzará a producir previsiblemente la insuficiencia financiera.

Los resultados del total gastos y total ingresos son los siguientes:



Proyección de Ingresos y Gastos del Sistema de la Seguridad Social

Porcentaje sobre PIB

	2007	2010	2015	2020	2025
GASTOS	8,9	9,8	9,9	10,0	10,6
Pensiones	7,6	8,3	8,5	8,6	9,3
Resto gastos	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3
INGRESOS	10,3	10,3	10,5	10,4	10,3
Cuotas	9,9	9,9	9,8	9,7	9,7
Resto ingresos	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6
SUPERAVIT/DÉFICIT del ejercicio	1,4	0,6	0,6	0,4	-0,3
SUPERAVIT/DÉFICIT Con aplicación del Fondo de Reserva	0,8	0,5	0,6	0,3	-0,3
Volumen del Fondo de Reserva (al final de cada ejercicio)	4,4	5,8	6,8	7,2	5,5

En relación con los resultados que se reflejan en el cuadro anterior hay que indicar lo siguiente:

- El total de ingresos del sistema de pensiones serán suficientes para cubrir los gastos totales hasta el año 2023. (En la proyección de 2005 se situaba en 2015)
- Durante ese período, en el que se seguirá produciendo superávit, se seguirá incrementando el Fondo de Reserva y sus correspondientes intereses, que alcanzarán previsiblemente una cifra equivalente al 6,5 por ciento del PIB en 2023.
- La utilización de dicho Fondo a partir de 2024 para equilibrar la insuficiencia de ingresos, permitirá compensar los resultados negativos hasta el año 2029. (En la proyección de 2005 se situaba en 2020).

En función de estos resultados hay que considerar que el plazo temporal hasta el año 2029, en el que se habrá agotado el Fondo de Reserva permite fijar el margen de maniobra del que se dispone para que se consoliden los efectos de la próxima reforma y situar por tanto el punto de equilibrio ingresos-gastos más allá de dicho año.



ESTRATEGIA NACIONAL PARA PENSIONES.

4. Modernización de los sistemas de pensiones en respuesta a las necesidades cambiantes de la economía, la sociedad y los individuos

El sistema de pensiones español, junto a las actuaciones en materia de sostenibilidad y adecuación ha realizado también esfuerzos importantes en materia de modernización, entre los que cabe destacar las siguientes:

En primer lugar, una serie de disposiciones legales recientes relativas a la protección social de los trabajadores autónomos han entrado recientemente en vigor o está previsto que se aprueben en los próximos meses. Así:

- **La Ley 18/2007, de 4 de Julio, de integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario** en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que entró en vigor en 1 de enero de 2008, tiene como finalidad actualizar el marco de protección social de los agricultores por cuenta propia, acercándolo al de los trabajadores autónomos de la industria y los servicios, con un aumento en las cotizaciones, que a su vez generará mejores prestaciones y una menor incidencia futura sobre las pensiones mínimas. Entre las medidas concretas recogidas en la Ley para dicha integración, destacan la equiparación de las bases mínimas de cotización con los trabajadores autónomos; la creación de un sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta propia dentro del RETA, con un tipo de cotización del 18,75% para la base mínima, y el establecimiento de incentivos dirigidos a fomentar la afiliación a dicho sistema Especial de los menores de 40 años que sean cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria. Estas medidas han afectado a 250.000 trabajadores autónomos agrarios aproximadamente.
- Otra medida legislativa con una importante incidencia en el Sistema de Seguridad Social es el **nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo (aprobado por la Ley 20/2007, 11 de Julio)** que, por primera vez en el ordenamiento español, regula los derechos y deberes de las personas que llevan a cabo una actividad independiente (más de tres millones) al tiempo que acerca, casi en una equiparación, su protección social con la correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena, abriendo el acceso a nuevas prestaciones (así, por ejemplo, a partir de enero de 2008, es obligatoria la cobertura por incapacidad temporal). Otra de las novedades de la Ley es la articulación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (siguiendo las orientaciones comunitarias) lo que va a permitir la regularización del trabajo de muchos falsos autónomos, con un aumento en sus contribuciones a la Seguridad Social y, por consiguiente, con mejores niveles de protección futuros.

Por otra parte, La **Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social**, dentro de las actuaciones dirigidas a la simplificación del sistema,



contempla el proceso de integración de algunos regímenes especiales en el Régimen General de trabajadores por cuenta ajena y en el de Autónomos, estando pendiente de completar, en los próximos meses, las normas de desarrollo para la integración de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario (740.531 afiliados a junio de este año) y la de los trabajadores afiliados al Régimen especial de empleados de hogar (282.472 afiliados) en el Régimen General.

Una tercera línea de modernización se relaciona con una mejor adecuación protectora a las nuevas realidades sociales. Así, **la citada Ley 40/2007**, introduce algunas novedades importantes entre las que cabe destacar los cambios realizados en las pensiones de supervivencia para responder mejor a las nuevas realidades sociales y familiares. El objetivo es que la pensión de viudedad recupere su carácter de renta de sustitución y se reserve para aquellas situaciones en las que el causante contribuía efectivamente al sostenimiento de los familiares sobrevivientes. Así, en caso de matrimonio, para acceder a la pensión de viudedad, cuando el fallecimiento del causante de la pensión se deba a una enfermedad común no sobrevenida tras la celebración del vínculo conyugal, se requiere un periodo previo de dicho vínculo de un año o la existencia de hijos en común con derecho a la pensión de orfandad. Por otra parte, entre otras modificaciones, se amplían los supuestos de protección a las parejas de hecho.

Un cuarto eje de interés, desde la perspectiva de modernización, se relaciona con la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres**, que ha incorporado diversas medidas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de forma que ésta fomente la asunción equilibrada de responsabilidades familiares y evite toda discriminación basada en su ejercicio. Estas medidas comportan algunas novedades importantes en el ámbito de la Seguridad Social y favorecen además una mayor continuidad y mejora en las carreras de cotización a lo largo de la vida laboral con el consiguiente reflejo en las prestaciones futuras. Así, entre las medidas que incorpora la ley hay que señalar:

- El reconocimiento de una nueva prestación económica de paternidad (de trece días de duración, durante el que continúa la obligación de cotizar, ampliable en caso de parto múltiple). Durante el 2007, desde la entrada en vigor en abril, se reconocieron 173.161 permisos con un coste de 123 millones de euros (superan los 140.000 en el primer semestre de 2008).
- La consideración, como cotizados a jornada completa a efectos de Seguridad Social, de los dos primeros años de reducción de jornada por cuidado de menor (un año únicamente en el resto de los supuestos de reducción de jornada).
- La consideración como periodos de cotización efectiva para el reconocimiento del derecho a prestaciones de los dos primeros años de excedencia que los trabajadores disfruten por cuidado de hijos o menor acogido (ampliables a 30 ó



36 meses en caso de familias numerosas); o del primer año de excedencia por cuidados de familiares. (el número de excedencias en 2007 alcanzó los 40.000

- Establecimiento de bonificaciones en las cuotas de seguridad social para los trabajadores en periodo de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural
- Reconocimiento del subsidio de maternidad y del permiso de paternidad a los trabajadores autónomos y bonificación de la cuota a la Seguridad Social por las trabajadoras autónomas durante su baja por maternidad.

Junto a estas líneas de modernización, hay que hacer una referencia a los esfuerzos, que continuarán durante la presente legislatura, en favor de una política reforzada de apoyo a las familias, con una adecuada conexión entre prestaciones no contributivas, beneficios fiscales y otras ayudas y prestaciones reconocidas desde otras Administraciones territoriales.

Otro aspecto igualmente importante a resaltar es la **gestión del Sistema**:

- El **mantenimiento de la confianza de los ciudadanos en el sistema de pensiones**, uno de nuestros activos principales de la sociedad española. La preocupación por la excelencia en la gestión del sistema de Seguridad Social hace del mismo, hoy, uno de los mejores gestionados en Europa. Informan la **gestión de nuestro sistema** los principios de simplificación, racionalización y transparencia gestora, junto a los de economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja; y de eficacia social y descentralización. Además, debe hacerse mención del escaso peso que los gastos de gestión tienen dentro de los presupuestos de la Seguridad social española (uno de los más bajos de Europa).

Desde esta perspectiva, la carta de servicios del Instituto Nacional de Seguridad Social, entidad que atiende anualmente la gestión de 8,1 millones de prestaciones y que resuelve más de 1,7 millones de nuevas prestaciones, recoge **compromisos** sobre las siguientes cuestiones, **basados en profundizar, como método, en la simplificación documental, la automatización de procedimientos y la reducción de tiempos de trámite**:

- **Agilidad en la gestión** (resolución de solicitudes de gestión garantizando la no interrupción de rentas; reconocimiento simultáneo del derecho a pensión con el de asistencia sanitaria, etc.).
- **Atención presencial y envío personalizado** de comunicaciones (tiempo medio de espera inferior a 15 minutos, contestación a peticiones informaciones escrita en plazo máximo de 30 días ó 15 por Internet, etc.).



- **Reducción de plazos de resolución** (10 días para pensiones de jubilación en acumulado a 31 de diciembre de 2007; 46 para las pensiones de invalidez –diez días menos que el año anterior -; 9 para las pensiones de supervivencia).
- Otro de los aspectos que está recibiendo una **atención prioritaria es el aumento de la transparencia en la gestión a través de las nuevas tecnologías**, favoreciendo la apertura y anticipación de la información al ciudadano y modernizando los sistemas de atención y comunicación interna. A este fin, a través de Internet y sin necesidad de certificado digital, junto a los procesos más habituales de información y consultas, se han incorporado también la obtención de formularios de solicitudes de prestaciones, la petición de certificados y un programa de auto-cálculo de la pensión de jubilación. Además, a través de la Oficina virtual, esta vez con certificado digital, se han incorporado nuevos programas que han recibido una acogida muy positiva. Por ejemplo, el programa, “¿Cómo va mi pensión?”, con mas de 100.000 consultas en 2007, u otros sobre percepción de pensiones públicas; información de ingresos y retenciones del IRPF; sobre revalorización de pensiones y de asistencia sanitaria en desplazamientos temporales por Europa.

Los aspectos y compromisos de continua mejora en la gestión, se extienden igualmente a las actividades de afiliación, encuadramiento, cotización y recaudación desarrolladas por la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo los principios fundamentales de eficiencia en la gestión, orientación al ciudadano, aprovechamiento de las nuevas tecnologías e impulso de la organización a través de sus personas. Las novedades más destacadas dentro sus actividades serían las siguientes:

- **Desarrollo, como continuación al sistema RED** (remisión electrónica de documentos) del Sistema RED DIRECTO, en empresas de menos de 15 trabajadores, para el cumplimiento de obligaciones en materia de afiliación, cotización y presentación de partes médicos a los efectos de las prestaciones de incapacidad temporal, pasándose de un sistema de autoliquidación de los sujetos obligados al pago a una liquidación efectuada mensualmente por la Tesorería General de la Seguridad Social, en función de la información existente sobre cada trabajador en la base de datos de la entidad
- **Puesta en marcha del proyecto SIMAD**, sobre seguimiento de impugnaciones administrativas, con vista a una gestión simplificada, rápida y eficaz de las mismas.
- **Reducción de los tiempos medios de trámite en los actos de afiliación y alta** (1 día) –y en la concesión de aplazamientos de pago (1,4 días). Esta reducción es más significativa si se considera que se han gestionado más de doce millones de altas y de bajas en la primera mitad de 2008.
- **Bajada de la tasa de morosidad** en los últimos años del 2,19 en el año 2000 al **1,06** en el año 2007.



La Tesorería General de la Seguridad Social ha desarrollado una importante labor de atención ciudadana tanto presencial (más de 13 millones de visitas en 2007), como telefónica (7.200.000 llamadas) o telemática, desarrollando además una importante actuación proactiva en la comunicación con los ciudadanos a través de campañas informativas, por ejemplo, sobre vidas informativas y bases de cotización.

Debe destacarse también que, en el ejercicio 2007, se ha aprobado la Ley/ 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que será aplicada antes de 31 de diciembre de 2008 y reconoce el derecho del ciudadano, sin limitación alguna, a relacionarse con las Administraciones públicas por medios telemáticos, con la correspondiente obligación de las administraciones públicas a aceptar como preferente este modo de tramitación.

La Ley 11/2007 realiza una presentación pormenorizada de este derecho que incluye: el acceso a servicios electrónicos de una manera libre y gratuita; la supresión, o en todo caso, reducción de la documentación a solicitar; la aceptación de cualquier soporte en la presentación de la documentación; el conocimiento en todo momento del estado de tramitación de las solicitudes; el derecho a cambio en cualquier momento de dirección para las correspondientes notificaciones; la obtención de copias electrónicas de los expedientes, etc. La Ley conlleva, entre otras implicaciones, la obligatoriedad del rediseño funcional previo de todos los procedimientos, el diseño de todas las aplicaciones de tramitación, el establecimiento de sistemas de información multicanal y de sedes electrónicas. En el conjunto de estas actividades desempeña una actividad central y destacada la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Finalmente, es importante recordar, una vez más, que el conjunto de medidas de modernización forman igualmente parte del proceso de consenso político y social existente respecto a las reformas de la Seguridad Social, construido alrededor del Pacto de Toledo y el diálogo social.

CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Informe de Estrategia pone de manifiesto que los resultados del sistema de pensiones han mantenido desde el año 2005 la senda de **sucesivos superávits**, lo que ha permitido, a su vez, seguir incorporando nuevas dotaciones al Fondo de Reserva que en este momento alcanza una cuantía equivalente al 5,32 por ciento del PIB.

Estos resultados positivos han sido debido fundamentalmente al buen comportamiento de la economía, a las medidas de fomento del mercado de trabajo que se han venido llevando a cabo en los últimos años, y a la importante incorporación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social, factores todos ellos que han permitido incrementos importantes en el número de afiliados.



En relación con las **perspectivas de futuro del sistema de pensiones** hay que resaltar los siguientes aspectos:

La entrada en vigor a partir de enero de 2008 de la **Ley 40/2007, de 4 de diciembre**, de medidas en materia de Seguridad Social, contiene aspectos que, tal como se han descrito en el presente Informe, se refieren a una mejora de la adecuación, la sostenibilidad financiera y la modernización de las pensiones, lo que contribuirá de forma positiva a garantizar el futuro del sistema de protección social.

Esta reforma va a tener su continuidad en el tiempo, ya que, a partir del último trimestre del año en curso, está previsto iniciar **nuevos trabajos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo** para proponer nuevas medidas dirigidas a continuar por la senda que permita, de un lado hacer compatible la consolidación del sistema de pensiones y su prolongación en el futuro con el incremento de la acción protectora, y , de otro, afianzar la contribución de la protección social al desarrollo económico de España. En este contexto se ha procedido a actualizar las proyecciones de gastos e ingresos del Sistema, con unos resultados más positivos que los presentados en el Informe de 2005, año en el que se preveía que el equilibrio ingresos-gastos se mantendría hasta el año 2015, y que la posterior utilización del Fondo de Reserva permitiría ampliar el punto de equilibrio hasta el año 2020.

Los resultados de las **nuevas proyecciones** realizadas, transcurridos tres años desde las anteriores, señalan que el **equilibrio ingresos-gastos** previsiblemente se situará en **2023** y la utilización del Fondo de Reserva **prolongará dicho equilibrio hasta 2029**. Es conveniente indicar que para la obtención de la proyección se ha tenido en cuenta la actual desaceleración económica, que se mantendrá hasta mediados de 2009, fecha a partir de la cual se espera recuperar la senda de crecimiento potencial.

Este Informe sobre la estrategia de pensiones de este año, al igual que sucedió en el ejercicio de 2005, **va a ser presentado a los interlocutores sociales**, Sus contribuciones y observaciones serán objeto de consideración en el proceso de diálogo social y, en particular, en el marco de la nueva ronda de trabajos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que ahora se inicia.